



Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general
15 de agosto de 2024
Español
Original: inglés

Comité contra la Tortura

Decisión adoptada por el Comité en virtud del artículo 22 de la Convención, respecto de la comunicación núm. 1066/2021* **

<i>Comunicación presentada por:</i>	H. G. (no representado por abogado)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado parte:</i>	Australia
<i>Fecha de la queja:</i>	23 de octubre de 2020 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión adoptada con arreglo a los artículos 114 y 115 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 31 de marzo de 2021 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de adopción de la decisión:</i>	19 de abril de 2024
<i>Asunto:</i>	Expulsión del autor a Sri Lanka
<i>Cuestiones de procedimiento:</i>	Grado de fundamentación de las alegaciones
<i>Cuestiones de fondo:</i>	Riesgo de tortura en caso de expulsión al país de origen (no devolución)
<i>Artículo de la Convención:</i>	3

1.1 El autor de la queja es H. G., nacional de Sri Lanka, nacido en 1987. En el momento en que presentó la queja, se había denegado su solicitud de asilo en el Estado parte e iba a ser expulsado a Sri Lanka. Sostiene que, si procediera a su expulsión, el Estado parte incumpliría las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3 de la Convención. El Estado parte ha formulado la declaración prevista en el artículo 22, párrafo 1, de la Convención, con efectos a partir del 28 de enero de 1993. El autor no está representado por un abogado.

1.2 El 31 de marzo de 2021, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 114 de su reglamento, el Comité, por conducto de su Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales, solicitó al Estado parte que no expulsara al autor a Sri Lanka mientras estuviera examinando su caso.

* Aprobada por el Comité en su 79º período de sesiones (15 de abril a 10 de mayo de 2024).

** Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Todd Buchwald, Jorge Contesse, Claude Heller, Erdogan Iscan, Peter Vedel Kessing, Liu Huawen, Maeda Naoko, Ana Racu, Abderrazak Rouwane y Bakhtiyar Tuzmukhamedov.



Antecedentes de hecho

2.1 El autor es de etnia tamil y entró ilegalmente en Australia, en barco, el 11 de mayo de 2010. Solicitó que se le reconociera la condición de refugiado el 7 de agosto de 2010 y mantuvo la correspondiente entrevista, con la asistencia de un intérprete de tamil, el 10 de agosto de 2010. Alegó que el Ejército de Sri Lanka había secuestrado a su padre en 1995, pero que desconocía los motivos de ese secuestro y si su padre había tenido algún tipo de vinculación con los Tigres de Liberación del Ílam Tamil (TLIT). La madre del autor quedó psicológicamente afectada a raíz del secuestro de su esposo. Con la ayuda de la tía del autor, que vivía en el Canadá, la familia se había trasladado a Colombo en 1995 para que la madre del autor pudiera recibir tratamiento médico. La familia había vivido allí hasta 1999 y, durante ese período, agentes de la policía y del Ejército de Sri Lanka habían acudido a su domicilio para interesarse por el paradero del padre del autor. La situación había empeorado en 1999 al recrudecerse el conflicto entre los TLIT y las fuerzas de Sri Lanka. Ese año, las autoridades del país habían acudido al domicilio del autor unas diez veces. Por recomendación de la misma tía, que les había conseguido visados, el autor y su familia se habían trasladado a la India, donde habían permanecido hasta 2010. El autor declaró que no tenía documento nacional de identidad y que había oído que otros tamiles que habían regresado a Sri Lanka sin documentos de identidad habían sido secuestrados y asesinados.

2.2 El 6 de septiembre de 2010, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía rechazó la solicitud del autor. El delegado del departamento señaló que las autoridades de Sri Lanka nunca habían detenido ni maltratado al autor ni a sus familiares. También señaló que el autor había salido legalmente de Sri Lanka cuando se había trasladado a la India y que en el pasaporte que había utilizado en aquella ocasión se especificaba que no tenía documento nacional de identidad. Por consiguiente, podría solicitar ese documento al regresar a Sri Lanka, un trámite habitual entre los tamiles desplazados como consecuencia del conflicto. Por todo ello, concluyó que el autor no tenía un perfil que pudiera ser de interés para las autoridades de Sri Lanka.

2.3 El 26 de septiembre de 2010, el autor solicitó que la evaluación de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se sometiera a una revisión independiente en cuanto al fondo y aportó nueva información según la cual el ejército sí había detenido a su padre, el autor había presenciado esa detención y su padre había estado vinculado a los TLIT. El 9 de abril de 2011, un experto independiente encargado de la revisión mantuvo, con la asistencia de un intérprete de tamil, una entrevista con el autor. El 19 de septiembre de 2011, el experto determinó que la situación del autor no cumplía los criterios necesarios para la concesión de un visado de protección. Constató que, si bien, durante la entrevista, el autor había hablado de la detención de su padre y de otros motivos por los que temía regresar a Sri Lanka, no fue hasta el final de la entrevista cuando había esgrimido el nuevo argumento según el cual su tía le había comunicado recientemente que la detención de su padre se había debido a los vínculos de este con los TLIT. El experto consideró que resultaba poco verosímil que el autor no hubiera preguntado a su tía por los motivos de la detención de su padre hasta la última fase del proceso de solicitud. Observó que el autor y su familia habían abandonado Sri Lanka en 1999 porque su tía les había instado a hacerlo, y no porque él personalmente temiera ser detenido y asesinado por la policía o el ejército. Por lo tanto, el experto no consideró que el autor corriera el riesgo de ser acosado o detenido, ya que no había motivo alguno para que se sospechara que pertenecía a los TLIT, en especial teniendo en cuenta que hacía mucho tiempo que no vivía en Sri Lanka.

2.4 El 13 de abril de 2012, el Tribunal Federal de Primera Instancia desestimó la solicitud presentada por el autor de examen judicial de la recomendación formulada tras la revisión independiente en cuanto al fondo. El tribunal consideró que el autor no había demostrado que en la revisión se hubiera vulnerado la equidad procesal o que no se hubieran respetado y aplicado correctamente los principios jurídicos pertinentes.

2.5 El 14 de mayo de 2012, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía reexaminó las reclamaciones de protección formuladas por el autor a la luz de la nueva información que el Departamento había recibido tras la revisión independiente en cuanto al fondo, a saber, una declaración jurada firmada por la tía del autor según la cual este había tratado de averiguar los pormenores de la detención de su padre y ella le había comunicado que su padre había sido detenido por el ejército y que, en efecto, había sido simpatizante de los TLIT. El

Departamento examinó esa nueva información teniendo en cuenta la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como información sobre la situación en el país en ese momento, y concluyó que no se habían producido cambios en las circunstancias del autor ni en la situación en Sri Lanka.

2.6 El 24 de agosto de 2012, el Tribunal Federal de Australia desestimó el recurso interpuesto por el autor contra la decisión dictada el 13 de abril de 2012 por el Tribunal Federal de Primera Instancia. El 15 de marzo de 2013, el Tribunal Supremo de Australia desestimó la solicitud de admisión a trámite de un recurso extraordinario presentada por el autor aduciendo que, de admitirse a trámite, el recurso no tendría suficientes posibilidades de prosperar.

2.7 El 3 de septiembre de 2012, el autor presentó una solicitud al amparo del artículo 46A, párrafo 2, de la Ley de Migración¹, en la que alegó que sus reclamaciones no se habían tenido plenamente en cuenta durante la revisión independiente en cuanto al fondo y que su caso se ajustaba a las disposiciones previstas por la ley con respecto a la protección complementaria. El 1 de noviembre de 2012, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía determinó que sus reclamaciones no cumplían los criterios establecidos en las directrices relativas al examen ministerial, ya que el autor no había aportado ninguna información nueva creíble que indicara que se le podría considerar simpatizante de los TLIT o que, por su perfil, podría resultar sospechoso y enfrentarse a un riesgo real de persecución. El Departamento consideró que el autor no había formulado ninguna reclamación nueva ni había aportado información adicional que incrementara las posibilidades de que su solicitud de visado de protección prosperara, ni siquiera con arreglo al criterio de protección complementaria previsto en el artículo 36, párrafo 2 aa), de la Ley de Migración. En consecuencia, la solicitud no se remitió al ministro competente.

2.8 El 11 de abril de 2013, el autor presentó una segunda solicitud de examen judicial de la recomendación formulada tras la revisión independiente en cuanto al fondo aduciendo que no se había tenido en cuenta el criterio de protección complementaria previsto en el artículo 36, párrafo 2 aa), de la Ley de Migración. El 18 de octubre de 2013, el ministro competente se retiró del procedimiento por considerar que, en vista de una decisión reciente del Pleno del Tribunal Federal, la recomendación formulada tras la revisión independiente en cuanto al fondo adolecía de un probable error de derecho. El asunto se remitió al Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras para su examen.

2.9 El 20 de marzo de 2015, el Departamento inició una evaluación de las obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales para determinar si, en el caso del autor, Australia había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El 22 de julio de 2015, el autor presentó nuevos argumentos y dijo que su estado de salud mental era delicado y que su tía le había comunicado recientemente que todos sus familiares, incluidos su madre y sus cuatro hermanos, habían sido miembros de los TLIT.

2.10 El 6 de junio de 2016, el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras consideró que Australia no había incumplido sus obligaciones de no devolución en el caso del autor. No creyó que el padre del autor u otros miembros de su familia hubieran apoyado a los TLIT de manera importante ni que la familia del autor estuviera en el punto de mira del Ejército de Sri Lanka, el Departamento de Investigaciones Criminales o la policía. Si bien consideró la gravedad del perjuicio alegado por el autor, determinó que no existían motivos fundados para creer que existiera un riesgo real de que este sufriera ese perjuicio, incluidas torturas. Estimó que el hecho de que las autoridades visitaran regularmente el domicilio del autor entre 1995 y 1999, poco después de que desapareciera su padre, no significaba que este correría un riesgo real de sufrir un perjuicio grave por alguno de los motivos contemplados en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados si regresaba a Sri Lanka, puesto que ninguno de los familiares del autor que seguían vivos en ese momento había sido detenido,

¹ En virtud de esta potestad discrecional, el ministro competente puede autorizar que una persona que haya llegado ilegalmente al país por vía marítima presente una solicitud de visado válida (en el caso del autor, una solicitud de visado de protección) si considera que ello redundaría en el interés público.

recluido, obligado a presentarse ante la policía o sometido a vigilancia. El autor apenas había facilitado información detallada que indicara si su padre había estado directamente vinculado a los TLIT, qué vínculos tenían los familiares de su padre con los TLIT o qué tipo de apoyo les habían prestado. Por lo tanto, no consideró probado que las autoridades de Sri Lanka hubieran identificado claramente al padre del autor o a otros familiares como personas vinculadas a los TLIT.

2.11 El 16 de junio de 2016, el autor solicitó al Tribunal de Circuito Federal que examinara la decisión sobre la evaluación de las obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales, alegando que el responsable de la evaluación había incurrido en un error jurisdiccional al aplicar un criterio erróneo para determinar sus supuestos vínculos con los TLIT. El 22 de febrero de 2019, el Tribunal de Circuito Federal desestimó la solicitud por entender que el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras no había cometido el error jurisdiccional alegado por el autor, entre otras razones porque el funcionario en cuestión había aplicado el criterio correcto en virtud del derecho internacional y había tenido en cuenta las directrices aplicables de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ya que había sido él quien se las había transmitido al autor para que hiciera observaciones al respecto y se había referido a ellas en la explicación de los motivos en que se fundamentó la decisión.

2.12 El 17 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Federal de Australia desestimó el recurso del autor. El 5 de febrero de 2020, el Tribunal Supremo de Australia desestimó la solicitud de admisión a trámite de un recurso extraordinario presentada por el autor por considerar que no había motivos para dudar de que la decisión dictada por el Tribunal Federal se ajustara a derecho.

2.13 El 16 de marzo de 2020, el autor presentó otra solicitud de intervención ministerial al amparo del artículo 46A de la Ley de Migración. Formuló nuevas alegaciones, como la de que se había acusado al nuevo Gobierno de Sri Lanka, presidido por Gotabaya Rajapaksa, de cometer abusos contra los derechos humanos de los tamiles. El 17 de julio de 2020, un funcionario del Ministerio del Interior concluyó que la solicitud no cumplía los criterios establecidos en las directrices para obtener la intervención ministerial, ya que era poco probable que la nueva información facilitada por el autor llevara a concluir que, en su caso, Australia había incumplido sus obligaciones de protección. Por consiguiente, la solicitud no se remitió al ministro competente para su consideración.

2.14 El funcionario observó que en el norte y el este de Sri Lanka se seguía vigilando y acosando a los tamiles, pero mucho menos que inmediatamente después de la guerra. También examinó las alegaciones del autor con respecto a la presidencia del Sr. Rajapaksa. En aquel momento, el funcionario señaló que no estaba claro qué repercusiones tendría la elección del Sr. Rajapaksa en noviembre de 2019 con respecto a las denuncias que indicaban que las fuerzas de seguridad en el norte y el este de Sri Lanka seguían, vigilaban, intimidaban y acosaban a los tamiles de forma cotidiana. No obstante, observó que no se disponía de información que indicara ningún cambio en el trato dado a las poblaciones minoritarias en Sri Lanka, en particular a los tamiles, ni tampoco en las políticas aplicadas a las personas vinculadas a los TLIT o sospechosas de estarlo. El autor no especificó la manera en que correría personalmente el riesgo de sufrir un perjuicio a raíz del cambio de gobierno que se produjo en noviembre de 2019 ni demostró que sería objeto de persecución o discriminación.

Queja

3. El autor sostiene que, debido a la actual situación política, de ser devuelto a Sri Lanka, correría un riesgo real de ser sometido a tortura y de sufrir tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, lo que constituiría una vulneración del artículo 3 de la Convención.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1 El 1 de marzo de 2022, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la queja. Se opone a la admisibilidad de la queja por entender que las reclamaciones formuladas por el autor son inadmisibles *ratione materiae* porque no cumplen los requisitos necesarios para establecer que existe un riesgo de tortura en el sentido del artículo 1 de la Convención. Sostiene que las reclamaciones del autor son

manifiestamente infundadas en el sentido del artículo 113 b) del reglamento del Comité porque ya han sido examinadas en el marco de procesos administrativos y judiciales exhaustivos a nivel interno.

4.2 En cuanto al fondo, el Estado parte recuerda detalladamente las decisiones adoptadas a nivel nacional. Concluye que el autor no ha aportado pruebas suficientes que indiquen que existen razones fundadas para creer que correría un riesgo personal de ser sometido a un trato constitutivo de tortura con arreglo al artículo 1 de la Convención.

Comentarios del autor acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

5. El 1 de mayo de 2023, el autor presentó sus comentarios sobre las observaciones del Estado parte. En particular, señala que la información más reciente sobre el país a la que hace referencia el Estado parte data de noviembre de 2019. El panorama político de Sri Lanka ha cambiado radicalmente desde entonces, ya que el Gobierno del Sr. Rajapaksa fue derrocado y se ha instaurado un nuevo Gobierno encabezado por Ranil Wickremesinghe. El autor se remite a diversos informes, publicados por Human Rights Watch y Amnistía Internacional entre 2021 y 2023, en los que se alude a la adopción de políticas hostiles hacia las comunidades tamil y musulmana durante la presidencia del Sr. Rajapaksa y a ejecuciones ilegales cometidas por el nuevo Gobierno, así como a casos de corrupción e impunidad. Por ello, el autor concluye que la violencia y la corrupción siguen imperando en Sri Lanka y que él sería un objetivo para los agentes de policía corruptos y otras personas que practican la extorsión.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1 Antes de examinar toda queja formulada en una comunicación, el Comité debe decidir si esta es admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 22, párrafo 5 a), de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional.

6.2 De conformidad con el artículo 22, párrafo 5 b), de la Convención, el Comité no examinará ninguna comunicación de una persona a menos que se haya cerciorado de que la persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer. El Comité observa que, en el presente caso, el Estado parte no ha puesto en duda que el autor haya agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que dispone.

6.3 El Comité observa que, en el presente caso, el Estado parte ha cuestionado la admisibilidad de la comunicación afirmando que es manifiestamente infundada y, por ende, inadmisibles con arreglo al artículo 22, párrafo 2, de la Convención y al artículo 113 b) del reglamento del Comité. Observa que, según el Estado parte, las autoridades nacionales ya examinaron las pruebas presentadas. Recuerda que corresponde a los tribunales de los Estados partes en la Convención, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas en cada caso particular, a no ser que pueda demostrarse que la manera en que se han evaluado tales hechos y pruebas fue claramente arbitraria o constituyó una denegación de justicia². Si bien da un peso considerable a la determinación de los hechos dimanante de los órganos del Estado parte de que se trate³, el Comité no está obligado por esa determinación. Por tanto, evaluará libremente la información puesta a su disposición de conformidad con el artículo 22, párrafo 4, de la Convención teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes de cada caso⁴.

² *G. K. c. Suiza* (CAT/C/30/D/219/2002), párr. 6.12. Véase también *Z. S. c. Georgia* (CAT/C/70/D/915/2019), párr. 7.4; y *S. K. c. Australia* (CAT/C/73/D/968/2019), párr. 12.5.

³ Por ejemplo, *T. D. c. Suiza* (CAT/C/46/D/375/2009), párr. 7.7; y *Alp c. Dinamarca* (CAT/C/52/D/466/2011), párr. 8.3.

⁴ Por ejemplo, *I. E. c. Suiza* (CAT/C/62/D/683/2015), párr. 7.4.

6.4 En el presente caso, el Comité observa que las autoridades judiciales y de inmigración del Estado parte examinaron a fondo los hechos y las pruebas presentadas por el autor —incluidas las nuevas pruebas presentadas en etapas posteriores del procedimiento— y constataron que las autoridades de Sri Lanka nunca habían detenido ni maltratado al autor ni a sus familiares, que el autor había salido legalmente de Sri Lanka cuando se había trasladado a la India y que no había demostrado que las autoridades de Sri Lanka hubieran identificado claramente a su padre o a otros miembros de su familia como personas vinculadas a los TLIT. Por ello, las autoridades concluyeron que el autor no había demostrado la existencia de razones fundadas para creer que correría un riesgo previsible, real y personal de ser torturado si era devuelto a Sri Lanka. El Comité observa asimismo que el autor rechaza la evaluación de su credibilidad realizada por las autoridades del Estado parte. Sin embargo, señala que el autor no facilita ninguna documentación ni otros elementos de prueba para fundamentar sus afirmaciones y que las autoridades del Estado parte consideraron, tras una evaluación exhaustiva de todos los hechos y pruebas alegados ante los tribunales de varias instancias, que el autor no había aportado pruebas suficientes de que correría un riesgo previsible, real y personal de ser torturado si era devuelto a Sri Lanka. Por lo tanto, el Comité considera que el autor no ha demostrado en la comunicación que se cometiera ninguna irregularidad en la evaluación que se hizo a nivel nacional de los hechos y las pruebas relativos al presunto riesgo de que recibiera un trato contrario a la Convención al regresar a Sri Lanka⁵.

6.5 El Comité recuerda sus decisiones anteriores en las que ha concluido que las reclamaciones son manifiestamente infundadas cuando el autor no ha formulado argumentos fundados que demuestren que el peligro de ser sometido a tortura es previsible, presente, personal y real. Recuerda asimismo que, para que una queja sea admisible con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención y el artículo 113 b) de su reglamento, no debe ser manifiestamente infundada. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y al no disponerse de otra información pertinente, el Comité concluye que el autor no ha fundamentado suficientemente sus alegaciones a los efectos de la admisibilidad⁶.

7. Por consiguiente, el Comité decide:

- a) Que la comunicación es inadmisibile en virtud del artículo 22, párrafo 2, de la Convención;
- b) Que la presente decisión se ponga en conocimiento del autor y del Estado parte.

⁵ *S. K. c. Australia*, párr. 12.5.

⁶ *Ibid.*, párr. 12.6.